

Presidencialismo y sistema de partidos en Argentina: El proceso político reciente

*Carlos F. Pressacco**

95

Resumen

El presente artículo analiza la trayectoria del sistema político argentino desde el punto de vista de dos de sus componentes: por un lado, desde el punto de vista del tipo de gobierno presidencialista, con las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 1994; por otro lado, desde la perspectiva de los cambios experimentados por el sistema de partidos. Ambos elementos se combinan en el análisis del reciente proceso político electoral que culmina con la conformación de un nuevo gobierno.

(*). Profesor e investigador de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile y director del magister en estudios sociales y políticos latinoamericanos de la misma institución.

Introducción

No cabe duda que la Argentina constituye un gran misterio que los acontecimientos del último año y medio no hacen más que profundizar. La respuesta a cómo un país poseedor de enormes riquezas naturales, de un vasto territorio, de una sociedad que ha gozado durante gran parte del siglo veinte de un nivel de desarrollo envidiable para la mayoría de sus vecinos y aún para países que actualmente se ubican entre los más prósperos, tempranamente modernizado, con una clase media extensa y sólida, con acceso a la educación y salud públicas de buen nivel, ha llegado a semejantes niveles de desintegración y pobreza, no es fácil de esbozar.

Sin embargo, la excepcionalidad argentina en el contexto latinoamericano proviene más bien de sus niveles de desarrollo socioeconómico, una relativa distribución equitativa del ingreso y la extendida presencia de un Estado proveedor de bienes y servicios de calidad, que por su desarrollo político democrático, variable en la cual la Argentina muestra un record de inestabilidad, golpes de Estado, debilidad del sistema de partidos y una cultura política bastante semejante a la de sus vecinos de la región, evidenciando un énfasis en la democratización social en detrimento de la democratización política.

Desde la mitad de la década del setenta, la Argentina ha experimentado un deterioro permanente de sus datos socioeconómicos que se ha profundizado en la última década, y la tendencia a la consolidación de las instituciones democráticas que había comenzado con la recuperación de la democracia en 1983, muestra dos hechos preocupantes: el fortalecimiento del poder presidencial y el debilitamiento del sistema de partidos.

La importancia del presidencialismo

Desde sus orígenes, los sistemas políticos latinoamericanos han reservado un lugar protagónico para la institución presidencial. Aunque tomaron como referencia el modelo estadounidense, los presidencialismos latinoamericanos siempre han sido más fuertes (incluso en países que como Argentina tienen una estructura federal), generando un desbalance entre el ejecutivo y el legislativo favorable al primero y dejando un amplio margen de maniobra para que el presidente de la república utilice su poder de manera discrecional.

En el análisis del presidencialismo se destacan cuatro factores. Por un lado, existe un factor de carácter institucional que hace que el presidente en este tipo de regímenes concentre una importante cantidad de atribuciones que lo colocan en el centro de la escena política y en una situación de predominio relativo con respecto al poder legislativo. Entre sus atribuciones se destacan los poderes de co-legislador (por medio de los cuales el presidente puede sancionar decretos y vetar parcialmente las leyes aprobadas por el congreso) y su capacidad para limitar la autonomía que las provincias debieran tener en un sistema federal, ya sea controlando un sistema de transferencias poco institucionalizado y interviniéndolas en caso de conflicto interno.

Junto con el factor institucional, es importante mencionar otro de carácter cultural: la tendencia de nuestras sociedades a privilegiar el gobierno unipersonal y la confianza no tanto en las instituciones como en las capacidades de los líderes políticos.¹

A los factores institucional y cultural se agregan otros dos: uno de carácter contextual y otro relacionado con la capacidad del presidente para lograr apoyos afines a su proyecto. En relación con el primero, se afirma que un contexto de crisis -como el experimentado en Argentina desde 1989- es propicio para desacreditar las soluciones aplicadas con anterioridad, para extender el temor al aumento de la conflictividad social y para usar recurrentemente la urgencia como argumento político.

Como señala Peruzzotti, "los reiterados fracasos de los intentos gubernamentales de estabilización económica contribuyen a un perverso proceso de aprendizaje colectivo: los actores asumen que cada nuevo intento de estabilización tendrá el mismo destino que los anteriores y por lo tanto apuestan a la derrota de los esfuerzos económicos del gobierno. Las sociedades pretorianas quedan aprisionadas en un gigante juego de relaciones sociales de suma cero".²

(Peruzzotti, 1998)

Finalmente, el poder presidencial se refuerza si se posee la capacidad para lograr mayorías legislativas (sea por medio del control de su partido o a través de alianzas con otras agrupaciones).

Estos cuatro factores que tienen una dilatada presencia en la política latinoamericana, se profundizan y se refuerzan mutuamente hacia finales del siglo XX dando lugar a la caracterización de nuestros sistemas políticos como "democracias delegativas": un presidente por encima de los partidos políticos,

1. En el caso específico argentino, este factor cultural tiene una manifestación específica con la emergencia del movimiento-partido justicialista. Diversas interpretaciones se han constituido en torno al peronismo. Desde el punto de vista de Ramos, el peronismo es un régimen político bonapartista que se sitúa por encima de los grupos y clases en pugna, arbitrando en sus conflictos. Bajo ciertas condiciones, estos regímenes pueden articular un proyecto nacional progresista y anticolonialista dada la inmadurez del proletariado y de la burguesía nacional. Desde otra perspectiva, Gino Germani sostiene que el peronismo es un movimiento nacional-popular que moviliza e integra a las masas a la arena política; se trata de un movimiento propio de una etapa de transición desde la sociedad tradicional hacia la sociedad moderna. Pero se trata de una incorporación anómala que permite que los sectores populares construyan su identidad pero con sumisión al líder; que subestima los valores formales del derecho y privilegia la concreción material de la justicia social; que es manipulada por el líder y por lo tanto es heterónoma. Según el esquema de Germani, es anómala porque no se ubica dentro de los márgenes de la democracia representativa, por lo que el peronismo constituye un régimen totalitario que se apoya en la clase obrera. Murmis y Portantiero, por el contrario, afirman que el peronismo no es un régimen totalitario basado en una relación vertical entre la clase obrera y el líder sino más bien el producto de una alianza promovida desde el Estado entre un sector de las clases propietarias y la clase obrera. El interés común que hace posible tal alianza es la relación existente entre la satisfacción de las demandas obreras y la expansión del mercado interno. Finalmente Laclau en el contexto de un esbozo de una teoría general sobre el populismo (del cual el peronismo sería un claro ejemplo en América Latina), sostiene que el peronismo es el resultado de un intento exitoso por llenar el vacío ideológico-político generado por la crisis de hegemonía de la oligarquía, la división del radicalismo, la imposibilidad de desarrollar políticas redistributivas y la crisis de las ideologías obreristas. Desde este punto de vista, el peronismo es una ideología que logra reunir en un discurso articulado elementos democrático-populares con elementos nacionalistas, antiliberales, antioligárquicos y antiimperialistas que sirve de amalgama para la alianza entre la clase obrera y la burguesía nacional; Véase: Emilio de Ipola, *Investigaciones políticas*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1989.

2. Este elemento contextual es fundamental para entender el papel de la presidencia y la manera en que se implementaron las reformas estructurales y las políticas de ajuste. Desde el punto de vista de algunos autores, se trató al menos en el origen, no tanto de una compleja operación ideológica de adhesión al "consenso neoliberal de Washington" sino de una respuesta pragmática ante una situación de crisis.

que se transforma en el centro de la política y que percibe a los otros poderes del estado y de la sociedad como un obstáculo en la persecución de sus objetivos políticos.

La idea de "democracia delegativa" pertenece a Guillermo O'Donnell y hace referencia a la tendencia predominante en América Latina a consolidar regímenes democráticos con un bajo nivel de institucionalización que a diferencia de lo experimentado en la región durante la década del 60 y 70, no desembocan en salidas autoritarias. (O'Donnell, 1 : 163-183) Son regímenes que se sostienen sobre la base de un liderazgo presidencial casi excluyente, que funciona al margen de las reglas del juego, que debilita la separación de poderes haciendo uso y abuso de las facultades colegisladoras que la constitución le atribuye al ejecutivo nacional. En este escenario, los partidos políticos quedan reducidos a meras maquinarias electorales y el poder legislativo es puesto por el ejecutivo en la difícil situación de avalar lo que el ejecutivo ya ha decidido o tratar de oponerse quedando sometido a sus críticas de lentitud, ineficiencia y despreocupación por solucionar la crisis.

De acuerdo con O'Donnell, son dos los elementos que sostienen a este nuevo tipo de democracia: la profundización de los rasgos populistas de la cultura política y un contexto histórico-estructural marcado por una profunda crisis económica y de la legitimidad y efectividad del Estado.

En el caso de Argentina, el elemento contextual que explica parcialmente el proceso es una crisis agravada por los erróneos diagnósticos iniciales que hasta 1986 (en la mitad del gobierno de Alfonsín) definían la crisis como de corto plazo.

El proceso de aprendizaje negativo -en donde a cada intento de solución sigue un fracaso- fue creando un clima favorable hacia soluciones más radicales propias del recetario neoliberal. Este elemento, más una correlación de poder favorable a estas políticas (mayor dependencia de los organismos multilaterales así como de bancos y países acreedores y mayor vulnerabilidad frente a los acreedores internos), constituyeron un escenario con escaso margen de maniobra, haciendo que las soluciones a la crisis fueran más un asunto de supervivencia política que de identificación ideológica. (Torres, 1998)

Este conjunto de elementos (cuya muestra más clara es la hiperinflación de 1989 y el adelantamiento de la entrega del poder por parte de Alfonsín) explica el "cheque en blanco" con que el presidente Menem inició su primer gobierno y el predominio de las prácticas delegativas. Si bien algunos autores distinguen claramente dos etapas en las relaciones entre ejecutivo y legislativo (hasta 1991, el comportamiento del ejecutivo coincide con el cuadro típico de "democracia delegativa", mientras que con la llegada de Cavallo al ministerio de economía, el énfasis cambia estableciéndose un espacio de negociación en donde el ejecutivo busca la colaboración del congreso y éste a su vez logra introducir alguna de sus demandas) la mayoría de los analistas confirman que el ejecutivo gobernó de manera claramente discrecional, abusando de los recursos de excepción y con el aval de una Corte Suprema conformada a la medida de los intereses del gobierno. Los datos son bastante claros: hasta 1994, Menem dictó 336 decretos de necesidad y urgencia y, hasta 1993, 38 vetos parciales.³

3. Estos datos han sido aportados por Delia Ferreira y Mateo Goretti, "Cuando el presidente gobierna solo. Menem y los decretos de necesidad y urgencia hasta la reforma constitucional (julio 1989-agosto 1994)", citados por Marcos Novaro y Vicente Palermo, (1998). "Gobiernos, parlamento y partidos en la Argentina de Menem", en Felipe Agüero y Héctor Urzúa, op.cit.

Pero no solo el contexto de crisis explica la situación. Menem supo acumular una gran cuota de poder: asumió la presidencia del partido justicialista, aprovechó un favorable clima de opinión, los resultados positivos del plan de convertibilidad (1991), el triunfo en las elecciones de 1993 así como el respaldo obtenido de una parte de la Unión Cívica Radical (UCR).

En este contexto, Menem impulsó su proyecto de reforma constitucional, no tanto como un componente del proceso global de modernización institucional sino como la expresión de la tradición peronista de afirmación del liderazgo personal por encima de las limitaciones institucionales.

El punto culminante de este proceso es el Pacto de Olivos (1993) mediante el cual Menem y Alfonsín acuerdan la reforma constitucional. El acuerdo contemplaba dos partes: a) un paquete cerrado, dentro del cual está la elección directa y reelección inmediata del presidente, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura y del cargo de Jefe de Gabinete, la segunda vuelta, un tercer senador para la minoría y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia; b) un conjunto de materias que se decidirían en el seno de la Asamblea Constituyente - conformada mayoritariamente por representantes del Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Grande- y que a la postre permitieron introducir mecanismos de participación ciudadana, el defensor del pueblo y los derechos del consumidor. (Novaro y Palermo, 1998)

Desde el punto de vista del fortalecimiento del poder presidencial, el balance de la reforma es ambiguo. Por un lado, se introduce el artículo que permite la reelección inmediata, se fortalece el presidencialismo y el desequilibrio institucional en su relación con el legislativo, así como la incorporación al texto constitucional de los decretos de necesidad y urgencia, el veto parcial y la delegación de poderes.

Por otro lado, se fortalece el federalismo (se incorpora a la constitución el mecanismo de coparticipación federal, se consagran nuevas atribuciones provinciales y la intervención federal debe ser aprobada por el congreso), el nombramiento de nuevos jueces se hace a proposición del ejecutivo pero con la aprobación de 2/3 del senado y la institucionalización de los decretos de necesidad y urgencia los transparenta y los somete a un mayor control.

Para algunos autores, el impacto final de la reforma no se mide tanto por sus aspectos institucionales sino por la manera en que los actores políticos interpretan dichos cambios. Y desde este punto de vista, hay dos factores adicionales a tener en cuenta: el factor peronista y el factor tecnocrático. Con el primero se hace referencia a un estilo particular de hacer política que se aleja de la tradición liberal democrática, enfatizando el apoyo popular (elemento plebiscitario) en detrimento del apego a las normas y procedimientos constitucionales; el resultado es un partido que posee una acabada comprensión del sentido del poder aunque no de la ley. El segundo hace referencia al predominio de un estilo de gestión que corresponde al rational choice y que percibe a la política como un obstáculo que debe subordinarse a la economía: "la competencia técnica se prestó para una operación eminentemente política, concurriendo al auxilio de las inclinaciones presidenciales. Porque con el afianzamiento de Cavallo y su compacto equipo de técnicos en la cartera económica, la propensión a gobernar discrecionalmente se revigoriza gracias a la coartada de la racionalidad tecnocrática que anima a dicho equipo". (Novaro y Palermo, 1998:322)

Si bien no debe exagerarse la importancia de los aspectos institucionales, la confluencia del reforzamiento del poder presidencial con la cultura política del partido presidencial, y una coyuntura ya no marcada por la crisis sino por las ambiciones reelección de Menem, crearon las condiciones para la constitución de un escenario crítico. Las exageradas atribuciones presidenciales facilitaron que el ex presidente Menem, empeñado en una reelección de dudosa legalidad, llevara adelante una política fiscal clientelista y poco disciplinada, concentrando el manejo de los recursos públicos en la presidencia de la república y transfiriendo dichos fondos a los distritos electoralmente decisivos y desperdiciando una valiosa oportunidad de ordenar las cuentas nacionales aprovechando los recursos generados por las privatizaciones y el ciclo favorable de la economía. (Arriagada)

Este tipo de situaciones muestra una constante subordinación de la institucionalidad a los intereses electorales de los líderes políticos que no dudan en modificar o pasar por encima de las reglas del juego. Cuando lo que predominan son los intereses personales por encima de las reglas del juego el que pierde es el sistema democrático y los límites de lo posible se amplían generando incertidumbre en la sociedad.

El sistema de partidos y su transformación

La otra cara del fortalecimiento del poder presidencial es el debilitamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos en Argentina han sido crónicamente frágiles. Si bien la UCR se constituye hacia finales del siglo XIX, lo cierto es que recién cobra importancia con el triunfo de Irigoyen en 1916, y los otros partidos existentes no pasan de ser pequeñas agrupaciones que no logran consolidar su organización y arraigo social.

El surgimiento del peronismo no mejora el panorama. Su ideología antiliberal lo coloca en una posición de desconfianza con respecto a la noción misma de partido y su rol en un sistema democrático, privilegiando la noción de movimiento más acorde con el tipo de relación planteada entre el líder y sus bases de apoyo.

Esta debilidad se profundiza por la constante interrupción de los regímenes democráticos y por el escaso respeto a las reglas del juego incluso cuando éste se encuentra formalmente vigente. Para tener una idea más clara de lo que estamos planteando basta tener en cuenta que en la Argentina existió un régimen democrático desde 1853 hasta 1930, entre 1932 y 1943, entre 1946 y 1955, entre 1958 y 1966 y entre 1973 y 1976; los otros años fueron regímenes autoritarios.

Sin embargo, esa democracia fue en muchas ocasiones una formalidad: hasta 1916, con predominio del fraude electoral; desde 1932 hasta 1943, la llamada "década infame" de fraude y corrupción generalizados; el período peronista vio debilitadas las competencias del poder legislativo y la oposición fue perseguida y amedrentada; de 1958 hasta 1966, fue una democracia en donde el principal partido (PJ) estaba proscrito.

Ello explica por qué no se consolida un sistema de partidos en Argentina; o bien se trata de un bipartidismo "frustrado" porque no logra la alternancia en el poder; o bien de un sistema de partidos predominante en donde el peronismo gana las elecciones o las hubiese ganado si hubiera podido participar; o de un bipartidismo entre dos sectores de un mismo partido como el que se verifica entre 1958 y 1966 en donde la competencia es entre dos facciones de la UCR.

Aparece aquí un dato importante: la UCR y el PJ ocupan la escena política y no permiten la conformación de partidos importantes ni a la derecha ni a la izquierda; no es que no existan el PS, PC, la Democracia Cristiana o el Partido Conservador pero no representan más que una minoría en términos electorales y son casi inexistentes desde el punto de vista legislativo.

Es más, el espacio vacante dejado por el peronismo proscrito entre 1955 y 1973, no logra ser capitalizado por ninguna fuerza política nueva y solamente potencia la división en el seno de la UCR en la que el sector intransigente intenta ser el portavoz de la legalización del PJ. El único matiz en este panorama son los partidos provinciales que se desprenden del peronismo.

Con la restauración de la democracia el panorama comienza a evidenciar cambios. Los partidos recuperan su protagonismo en el sistema político y afrontan un profundo proceso de transformación tanto desde el punto de vista de su organización interna como de sus programas y su identidad.

En 1983, por primera vez en la historia, la UCR y el PJ competirán en elecciones libres y transparentes con semejantes posibilidades de triunfo. La primera derrota electoral del peronismo desencadenará un proceso de autocrítica y renovación al interior de dicho partido que comenzará a fortalecer su organización interna y a funcionar como un partido político. También significará para el peronismo un proceso de aprendizaje: el de ser oposición.

Si bien los otros partidos políticos no desaparecen (es más, se consolidan un partido de izquierda, el Partido Intransigente heredero de la antigua intransigencia radical y un partido de derecha, la UCD encabezada por el ingeniero Alvaro Alsogaray), se constituye un sistema de partidos bipartidista en el que la UCR y el PJ controlan más del 80% de las bancas parlamentarias.

Es además, un sistema de partidos en donde el partido gobernante logra un elevado nivel de disciplina de sus bancadas en el congreso. En principio, destaquemos tres elementos que influyen en esta disciplina: a) la puesta en común de los votos entre los candidatos del partido; b) el control sobre quien es el candidato del partido y; c) el control del orden con que los candidatos aparecen en la lista. (Jones, 2002)

A contramano de lo que indicaría la versión ortodoxa de la democracia delegativa, el partido gobernante es un importante recurso político, especialmente desde el Pacto de Olivos. Esto es evidente en el campo electoral en donde el peronismo triunfa en las elecciones constituyentes y en todas las elecciones hasta las presidenciales de 1999; pero también el partido cumple un importante rol en la tarea de lograr que la administración funcione de manera relativamente eficiente y en las relaciones del ejecutivo nacional con las provincias.

El panorama bipartidista se mantendrá hasta la constitución del Frente Grande, que luego dará origen al FREPASO. Dicha fuerza política obtendrá 29% de los votos y el segundo lugar en las elecciones de 1995, con Octavio Bordón (ex gobernador peronista de la provincia de Mendoza) como candidato.⁴

4. Cabe destacar que en el FREPASO se integra el "Grupo de los 8", disidentes del partido justicialista entre los que se encuentra Carlos "Chacho" Alvarez.

Si bien la consolidación del FREPASO muestra tímidamente que el sistema de partidos avanza desde un bipartidismo inestable hacia un multipartidismo moderado, dichas expectativas se verán desmentidas por el desarrollo del proceso político. Para las elecciones presidenciales de 1999, se constituye la "Alianza" entre la UCR y el FREPASO que derrota en la primera vuelta a Eduardo Duhalde, candidato del PJ. La renuncia del vicepresidente Alvarez sepulta a la Alianza, hace desaparecer el FREPASO, y a la larga, crea las condiciones de inestabilidad que terminan con el gobierno de De la Rúa.

Más allá de la cantidad de partidos que se constituyen, un cambio a destacar es el que se produce en las identidades de los dos más importantes partidos. Se trata de lo que Basualdo denomina "transformismo argentino" (Basualdo, 2001). Si bien el uso de la categoría gramsciana puede merecer algunos reparos -tal como lo precisa Num en el comentario final incluido en el mismo libro- tiene la ventaja de dejar al descubierto una de las principales transformaciones del sistema político argentino de finales del siglo XX.

Los orígenes de este proceso hunden sus raíces en el régimen autoritario que condujo al país entre 1976 y 1983, profundizándose durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). Durante este período se reemplaza violentamente el perfil industrial de la economía nacional por otro que privilegia la valorización financiera. Los recursos que alimentan la especulación financiera provienen de la redistribución regresiva de los ingresos, posible además, por la violenta represión que sufrieron las organizaciones sindicales y populares.

Los principales beneficiados en este nuevo esquema fueron algunos grupos económicos que luego tendrán un importante protagonismo en el proceso de privatizaciones: "a partir de la dictadura militar, y de las profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que acompañaron la mayor derrota popular del siglo XX, la situación anterior se replanteó drásticamente. De allí en mas, los acreedores externos y el capital concentrado interno -constituido a partir de entonces por los conglomerados extranjeros y los grupos económicos locales- pasan a controlar el proceso económico con base a la sobreexplotación de los trabajadores y a una férrea subordinación del Estado a sus intereses particulares. El proceso de acumulación que lideran se sustenta en la valorización financiera y, por lo tanto, ya no está condicionado por el consumo de los sectores populares ni por las fronteras nacionales, impulsando la disolución del capital industrial local que establecía alianzas de diversa índole con los asalariados en la búsqueda de lograr el desarrollo industrial". (Basualdo, 2001:39)

Con el ascenso de Menem al poder, el proceso descrito se profundiza. La Ley de Emergencia Económica, la de Reforma del Estado (donde se fijaba el cronograma de las futuras privatizaciones), y, más adelante (1991) el Plan de Convertibilidad de Domingo Cavallo, marcan el total predominio del sistema económico y la desaparición de la autonomía relativa de un sistema político cuyos principales partidos (la Unión Cívica Radical y el Justicialismo) rompen con su identidad histórica, dejando de ser la expresión de los intereses sociales que representaban.

En contrapartida, los partidos se transforman en "empresas" cuyos principales ingresos son los salarios vinculados al empleo estatal (cargos de responsabilidad política y gerencial), contratos en proyectos financiados por organismos internacionales y los sobornos (que se denominan "retornos", "peajes" o

“comisiones”) que pagan los sectores dominantes para obtener los favores del sistema político.⁵

El “transformismo” explica la incapacidad del sistema político para distribuir los costos de la crisis de manera equitativa. El país ha sido testigo de cómo las desigualdades sociales se han agudizado en los últimos años. Es evidente que la imagen mítica de una Argentina sin pobres no ha correspondido a la realidad - especialmente si se consideran las fuertes diferencias territoriales- pero no es menos cierto que los resultados del proceso de desarrollo permitieron un clima de igualdad social que experimentaron pocos países en la región.

El antecedente de una experiencia de modernización con integración social hace aun más difícil aceptar como un “resultado inevitable” la existencia de un cuadro social alarmante en donde el deterioro generalizado de la calidad de vida la mayoría de la población contrasta con el incremento de la concentración de la riqueza en pocas manos.

Si el gran mérito de la convertibilidad fue permitir que la sociedad argentina recuperara la estabilidad -luego de la traumática experiencia de la hiperinflación de 1989-, con un ritmo razonable de crecimiento económico y con bajísimos niveles de inflación, las consecuencias del proceso anteriormente descrito han sido enormes:

- La deuda externa supera los 140 mil millones de dólares; hay que recordar que en 1991 ésta alcanzaba los 62.000 millones, y que en el camino el Estado privatizó casi todas las empresas públicas.
- La desocupación supera el 25% (dato ciertamente engañoso si se tiene en cuenta la manera en que se construyen metodológicamente las encuestas de empleo y el empleo informal); una idea de la gravedad de la situación se obtiene si se tiene en cuenta que el 15% de cesantía (dato de 1999) equivalía a seis veces el promedio de la desocupación en Argentina entre 1900 y 1980.
- La encuesta permanente de hogares señala, para el año 2000, que el 50% de los hogares argentino percibe menos de 900 pesos mensuales, mientras que el costo de la canasta familiar tipo supera los 1.050 pesos. En la actualidad en la Argentina hay 18 millones de personas pobres (50% de la población), de los cuales ⁶ millones son indigentes⁶ (cabe precisar que para ser considerado “pobre”, se necesita tener un ingreso de 490 pesos)
- En lo que se refiere a la distribución del ingreso, mientras la participación del 10% más pobre cayó del 3,1% al 1,5% entre 1975 y 1998, la del decil más alto creció del 24,6% al 36,7% en el mismo periodo. Un ejemplo gráfico de esta situación de creciente concentración del ingreso se observa en el ingreso

5. Si se tiene en cuenta que el porcentaje por concepto de “coimas” equivale al 20% de cada operación y que entre 1990 y 1994 se privatizaron empresas estatales por un total de más de 25 mil millones de dólares, resulta que solo por estas operaciones, los partidos políticos obtuvieron ingresos por alrededor de 5 mil millones de dólares.

6. Ver edición del Diario Clarín de Buenos Aires, correspondiente al día 1º de junio del 2002.

promedio de los ejecutivos de grandes empresas en relación al ingreso per cápita del país y en la diferencia entre el salario de gerente y el salario medio del trabajador del sector industrial: 39 y 30 mientras que en los países desarrollados no supera el 7 y 13 respectivamente. (Borón, 2000)⁷

Esta situación de por sí grave contrasta con un proceso de creciente concentración de la riqueza y las oportunidades favorecido por la emergencia sin contrapesos de una economía capitalista de mercado que, como sostiene Dahl, sin regulaciones por parte del Estado, genera importantes efectos perjudiciales no solo en lo que se refiere a la profundización de la inequidad económica sino también a la difusión de un creciente sentimiento de impotencia en vastos sectores de la sociedad que perciben como imposible la tarea de ejercer sus derechos y libertades frente a los poderes "fácticos". (Dahl, 2001)

El impacto político no es menor: la excesiva concentración de los recursos de poder social y económico en muy pocas manos, en el contexto de un proceso de debilitamiento del Estado y de fortalecimiento del poder presidencial, hace imposible un reparto razonable de los costos de la crisis; aquellos que tienen mayor capacidad de influencia logran hacer predominar sus intereses incluso a costa de los derechos de las mayorías.

El proceso político electoral: 1999-2003

En las elecciones de 1999 compitieron el candidato justicialista Eduardo Duhalde con una propuesta que buscaba moderar los efectos sociales negativos resultado de la puesta en práctica del programa menemista (pero muy debilitado por el intento del mismo Menem de ser candidato y así obtener un tercer mandato consecutivo, posibilidad explícitamente vedada por la constitución) y Fernando De la Rúa, que junto con Carlos "Chacho" Alvarez representaban a la Alianza conformada por el partido de la Unión Cívica Radical (en donde De la Rúa representa al ala más conservadora) y el FREPASO, conglomerado de centroizquierda en donde confluyen diversas agrupaciones, incluido un grupo de disidentes del partido justicialista, al cual pertenecía el propio Alvarez.

La Alianza (cuya principal amalgama no era tanto un programa de gobierno como el deseo de obstaculizar la continuidad justicialista en el poder) triunfa en las elecciones con una ventaja suficiente que evita la segunda vuelta⁸, con un discurso que destacaba la honradez de sus líderes (en contraste con la corrupción menemista) y el énfasis en lo social y en la disminución de la desocupación.

Sin embargo, las expectativas sociales pronto se vieron defraudadas. A la zigzagueante política del gobierno, su falta de liderazgo y los conflictos al interior de la Alianza, se sumaron dos hechos que minaron la confianza de la sociedad en el gobierno: por un lado, el escándalo por los sobornos pagados desde el gobierno a un grupo de senadores (oficialistas y de oposición) para obtener la aprobación

7. Algunos de los datos citados por Borón son extraídos de Artemio López, "Vivir con dos pesos", *Diario Clarín, Suplemento Zona*, 16 de agosto de 1998.

8. Recordemos que, de acuerdo a la constitución reformada en 1994 como resultado del Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, la segunda vuelta solo es necesaria si el primer minoría no obtiene el 45% de los votos o si obteniendo el 40% la diferencia con la segunda minoría no supera el 10%.

de la ley de flexibilidad laboral; la maniobra, denunciada por el vicepresidente Alvarez no encontró respaldo en el ejecutivo nacional y Alvarez optó por renunciar debilitando aún más a la coalición; por el otro, el nombramiento de Domingo Cavallo (ex ministro de economía de Menem y autor del Plan de Convertibilidad que establecía la paridad entre el peso y el dólar) en el ministerio de economía a finales de marzo de 2001, decisión que fue interpretada como una "traición" por parte del electorado aliancista que había votado a De la Rúa demandando un cambio en la política económica.

La sanción ciudadana no se hizo esperar y los partidos gobernantes sufrieron una aplastante derrota en las elecciones parlamentarias de octubre de 2001: en una elección en donde el abstencionismo y el voto en blanco y nulo fue protagonista ubicándose como la segunda fuerza electoral (en un país en donde el voto es obligatorio, 6 millones de personas no concurrieron a las urnas y casi cuatro votaron en blanco o anularon su voto), la Alianza perdió 5,4 millones de votos en relación con las presidenciales de 1999 y 17 escaños en la Cámara de Diputados.

Las tensiones se fueron profundizando y la incapacidad del gobierno para conducir la crisis desembocó en los sucesos del mes de diciembre de 2001 con la renuncia, primero, del ministro Cavallo y luego del presidente De la Rúa. Tras una efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saa, gobernador justicialista de la provincia de San Luis, el congreso argentino designó como presidente al senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, quien debía completar el mandato dejado inconcluso por De la Rúa hasta el 2003.

En un primer momento, el gobierno de Duhalde estuvo marcado por la agudización de la crisis social, los esfuerzos por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita al país salir del default y por una devaluación de la moneda del más del 300%. A ello se sumó el cuestionamiento sobre la legitimidad de un gobierno nombrado por un Congreso con casi nula credibilidad ciudadana.

En este contexto, a nadie sorprendió el llamado anticipado a elecciones de presidente y vicepresidente. Inicialmente programadas para septiembre de 2003, su realización se adelantó para el 27 de abril y las nuevas autoridades asumirán el 25 de mayo; si hay segunda vuelta, esta se realizaría el 18 de mayo. Inicialmente, la convocatoria incluía un mecanismo novedoso: la obligatoriedad de internas abiertas y simultáneas para todos los partidos en noviembre del 2002, medida que con contaba con el respaldo mayoritario de la sociedad (más del 70%). El mecanismo buscaba dar un balón de oxígeno a la cuestionada clase política estimulando la competencia intrapartidista.⁹

También se debatió en su momento la necesidad de elegir al ejecutivo nacional sin renovar ambas cámaras del poder legislativo, los poderes provinciales e incluso los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En un contexto de evaluación negativa de la clase política, una renovación más amplia de las autoridades políticas es una moderada manera de dar cabida al tan repetido e imposible "que se vayan

9. *La otra alternativa era utilizar la "ley de lemas", que consiste en la resolver en la misma competencia electoral el triunfador de la disputa interna y de la nacional (explicar mejor). Este sistema vigente durante mucho tiempo en Uruguay y en algunas provincias argentinas en la actualidad, permite a la ciudadanía hacer uso de un doble voto simultáneo: votar por el partido de su preferencia y, al interior de dicha lista, elegir su candidato riesgos de desideologización y fraccionamiento de los partidos y el peligro de elegir un candidato que no fuera el más votado.*

todos". La propuesta al final no prosperó: con un escenario donde lo más probable es el triunfo de un candidato peronista, ninguno de los precandidatos de dicho partido estaba realmente muy interesado en desprenderse del importante capital político que significa la mayoría en ambas cámaras.

Tema central del proceso electoral fue el de las posibilidades de Menem de triunfar en las elecciones. Al final del año 2002, Menem aparecía muy mal evaluado en la opinión pública aunque ya mostraba una tendencia a mejorar. Menem se ubicaba segundo con un 9,7% en la intención de voto para presidente detrás de Rodríguez Saa (siempre dentro del justicialismo). Sus resultados no eran tan buenos cuando se trataba de su imagen positiva: allí solo obtenía un 13%, detrás de otros referentes justicialistas como Kichner y el mismo Rodríguez Saa. Estas cifras ya mostraban la dificultad del ex presidente para superar el rechazo de un amplio sector de la sociedad argentina.

Para la mayoría de la sociedad argentina, Menem es el responsable de crear las condiciones que luego generó la crisis actual. Además, tiene la resistencia de sectores importantes del justicialismo, entre ellos varios de los gobernadores provinciales que estuvieron desde un comienzo en la competencia electoral.¹⁰

Sin embargo, y pese al sombrío panorama que se le presentaba, Menem contaba con algunos recursos que podía utilizar para fortalecer sus oportunidades electorales:

- En un país inestable y temeroso de la hiperinflación, Menem puede seguir utilizando como recurso propagandístico la estabilidad y crecimiento experimentadas durante su gobierno.
- Otros dos elementos a su favor son sus deseos de ser candidato -ya vimos cómo esa voluntad y ambición explican gran parte de la crisis- expresado desde el mismo momento que deja la presidencia y su convicción de ser un candidato "ganador"; Menem tiene en su curriculum haber derrotado en las primeras internas justicialista al "renovado" Antonio Cafiero, presidente del partido y "dueño" de toda la maquinaria partidaria en 1988. Una muestra de cómo esa confianza contribuye a crear escenarios favorables a su candidatura, es que si bien son pocos los ciudadanos que respaldan públicamente a Menem son muchos los que creían que sería el próximo presidente argentino.
- Puede contar con un partido que tiene una sólida estructura interna a nivel nacional que tiene un piso electoral del 30%; una muestra de ello la tenemos en las última elecciones parlamentarias de octubre de 2001 en donde el justicialismo obtuvo mas de 5,5 millones de votos, la mayoría en ambas cámaras y la de los gobiernos provinciales.
- Menem es el único candidato que, con la excepción parcial de los gobernadores justicialistas, puede mostrar un currículum de diez años continuos de

10. El de Santa Fe, Carlos Reutemann, y el de Córdoba, José Manuel de la Sota, que renunciaron a sus precandidaturas; Nestor Kichner (de Santa Cruz) y el ex presidente Rodríguez Saa (también exgobernador de San Luis) ambos competidores de Menem en la primera vuelta.

desempeño en las más altas responsabilidades ejecutivas del país y de protagonismo en la vida política del país durante los últimos 30 años.

- Si bien es cierto que fueron sus gobiernos los responsables de crear los antecedentes de esta situación, siempre podrá decir que no sucedió en su gobierno y que de haber sucedido en su gobierno hubiera tomado las medidas necesarias para evitarlo; Menem cuenta con un recurso político de suma importancia: los que vinieron tras él lo hicieron peor.

Todos estos elementos no tienen la misma importancia; hay algunos que tienen un claro contenido propagandístico mientras que otros son bastante objetivos. Por otro lado, lo que para Menem y su entorno constituye su principal capital político, es decir su experiencia de gobierno y su declarada "inocencia" en la crisis actual, son al mismo tiempo el blanco central de las críticas de la sociedad argentina que destaca de su gobierno la corrupción, el desprecio por las normas y la institucionalidad y los elevados costos sociales de su política económica.¹¹

Otro elemento a considerar era el panorama de los potenciales competidores. Por el lado del Partido Justicialista, la candidatura de Menem fue acompañada por la de Rodríguez Saa y la de Kirchner.

Frente a los candidatos del justicialismo se ubicaba la diputada Elisa Carrió, del partido Alternativa para una República de Iguales (ARI). Escindida de la Unión Cívica Radical a inicios del 2001 (partido por el cual fue electa diputada en 1996), Carrió ha ganado espacio sobre la base de un fuerte perfil fiscalizador basado en la denuncia de casos de corrupción logrando una importante imagen positiva, pese a lo cual sus posibilidades de triunfo se ven afectadas por la ausencia de un partido estructurado a nivel nacional, inexperiencia en responsabilidades ejecutivas y la tendencia a la fragmentación y el sectarismo de la izquierda argentina (en las elecciones parlamentarias del 2001, el conjunto de la izquierda -excluido el FREPASO- obtuvo casi 1,5 millones de votos repartidos entre siete u ocho agrupaciones) que hacen difícil sumar el apoyo de otros grupos que le darían más fortaleza a su candidatura (como es el caso de Luis Zamora, diputado del Partido Autodeterminación y Libertad que tiene una imagen positiva del 23% aunque débil a nivel nacional).

A la derecha, se ubicaba la candidatura de Ricardo López Murphy, ex militante de la UCR y ex ministro de defensa y economía durante el gobierno de De la Rúa, que formó un nuevo referente político RECREAR.

La renuncia de Menem

Como es sabido, en la primera vuelta compitieron candidatos de diecinueve agrupaciones políticas, entre ellas, tres que representaban diferentes sectores del partido justicialista: Menem a la cabeza del Frente por la Lealtad, Kirchner con el Frente por la Victoria y Adolfo Rodríguez Saa con su Movimiento Nacional y

11. Un elemento que debilitó la candidatura de Menem es la distancia que en su momento tomó el gobierno de Estados Unidos respecto de su figura reflejadas en las declaraciones del Secretario del Tesoro Paul O'Neill sobre los temores que la ayuda solicitada por Argentina terminara en bancos suizos, justo en el momento en que el propio Menem reconocía por primera vez la existencia de una cuenta en dicho país.

Popular. Tal situación fue el resultado del abandono del plan inicial que era la realización obligatoria de internas abiertas para la selección de los candidatos de los diferentes partidos políticos.

La propuesta tenía como objetivo inicial que en dichas elecciones internas solo participaran los afiliados del propio partido. Cuando se extendió dicha posibilidad a todos los ciudadanos que no militaran en partido alguno, Menem temió que la fuerte tendencia antimennemista de los otros partidos se expresara en dichas internas impidiéndole el paso a su candidatura única por el peronismo.¹²

Con el paso del tiempo, la obligatoriedad de las internas quedó en el olvido. En el caso específico del partido Justicialista, fue en el congreso partidario de Lanús en el cual se dio luz verde para que, aprovechando un vacío legal, las diferentes líneas internas pudieran formar diferentes alianzas y competir en las elecciones presidenciales de abril.

Menem aceptó este hecho con la esperanza de poder capitalizar el recuerdo favorable de parte de la sociedad argentina en relación a sus dos gobiernos y con la esperanza de poder romper los nexos existentes entre su segundo gobierno y la crisis que terminó anticipadamente con el gobierno de De la Rúa.

Con estas expectativas, Menem compitió en la primera vuelta seguro no solamente que ganaba sino que ganaba con más del cuarenta por ciento de los votos; los más optimistas hablaban incluso de que no sería necesaria la segunda vuelta. Si bien en el día mismo de las elecciones ya era claro el error, lo cierto es que hasta muy avanzado el recuento de votos, Menem insistía en que ganaría por más de 8 puntos de diferencia.

Sin embargo, el triunfo de Menem en primera vuelta le auguraba un panorama complicado para la segunda. Ya las encuestas realizadas en el periodo preelectoral mostraban que Menem perdía cualquiera fuera su contrincante en la segunda vuelta. Por un lado, los resultados de la primera vuelta mostraban que sólo podía incrementar su apoyo si lograba captar el respaldo de una parte del electorado que votó por la candidatura de López Murphy pensado en la continuidad del modelo económico y de Adolfo Rodríguez Saa (apoyo que Menem trató infructuosamente de sumar viajando a San Luis a reunirse con el ex presidente). Por otro lado, podía perder parte de su apoyo inicial: el de quienes votaron a Menem pensando en que ganaba. Finalmente, todas las encuestas post segunda vuelta daban alrededor de 70% de apoyo a Kirchner.

Con este panorama, el entorno de Menem empezó a hacer cuentas y la intención inicial de Menem de presentarse se fue debilitando. En su carta de renuncia, Menem afirma que se retira de la segunda vuelta argumentando que el balotaje está pensado para que compitan dos candidatos de diferentes partidos y no para resolver la interna del justicialismo, lo cual se podría haber resuelto con la realización de internas abiertas en cada partido. Pero sus argumentos van más allá y cuestiona la legitimidad del triunfo de Kirchner. En su carta de renuncia afirma que "hoy más que nunca, la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de las mas plena y transparente legitimidad democrática" y que

12. La obligatoriedad de las internas también era un problema para partidos en los cuales no había más que un solo candidato, como era el caso del ARI y Elisa Carrió.

“lamentablemente, considero que este objetivo, absolutamente necesario, no está garantizado con el cumplimiento de la segunda vuelta electoral”.

Los argumentos de Menem son poco convincentes y nada de lo que argumenta en su carta era desconocido antes de la primera vuelta, salvo el resultado. Parecen haber tenido más peso en su decisión tres tipos de razones menos altruistas que las declaradas.

- a) Menem, que ha estado en el centro de la escena política argentina durante los últimos trece años, no estaba dispuesto a enfrentar la primera derrota electoral de su carrera;
- b) Hay que tener también en cuenta las presiones de los gobernadores afines a Menem que miraban con temor el impacto de la segura y contundente derrota en sus propias ambiciones de cara a las elecciones provinciales de fin de año.
- c) Están los que afirman que la retirada de Menem deja a Kirchner en una situación de debilidad (o por lo menos de no tanta fortaleza como su hubiera obtenido el 70% de apoyo de electorado) lo que significa que los intereses con los cuales se enfrentará tendrán más poder para defender sus intereses, que son los que durante sus gobiernos Menem protegió.

En todo caso, más allá de sus cálculos personales y políticos, lo cierto es que con su conducta ha hecho un daño enorme a la democracia y ha profundizado su ya amplio desprestigio profundizando su imagen de ser alguien que respeta o deja de respetar las reglas del juego según sus intereses.

Pero no solo se profundiza el deterioro de su imagen en los sectores antimenemistas. La imagen de un Menem que huye del desafío de la segunda vuelta lo desprestigia también frente a sus adherentes quienes no logran comprender como alguien que siempre ha destacado su capacidad de reponerse ante situaciones adversas, que ha reiterado hasta el cansancio que no cree en las encuestas, que incluso en un escenario adverso se repone, retire su candidatura.

Pero incluso es un error pensando en su futuro y el de su sector. Si Menem se hubiera presentado a la segunda vuelta, todas las encuestas afirman que hubiera obtenido entre el 25% y el 30%, cifras que representan un importante capital político en un panorama en donde predomina la fragmentación. Destaquemos lo siguiente: ese porcentaje representa un piso; en un contexto de marcado antimenemismo y si bien están muy lejos del caudal de apoyo de Kirchner tiene la ventaja de ser un respaldo propio y no prestado de otros partidos políticos.

El nuevo gobierno

El gobierno del presidente Kirchner enfrenta importantes desafíos y para analizar su capacidad de cara a enfrentar estos desafíos es importante tener en cuenta algunos antecedentes. En primer lugar, llega al poder gracias al respaldo del sector duhaldista que, luego de intentar sin éxito potenciar las candidaturas de Reutemann y De la Sota encontró en el santacruceño su candidato a quien que

le aportó -según palabras del propio presidente- más de la mitad de sus votos, decisivos en el triunfo en la provincia de Buenos Aires.

Su campaña se desarrolló sin apelar a grandes promesas, lo cual ha generado un clima de muy bajas expectativas en la sociedad argentina que espera del gobierno -y en general de la clase política- responsabilidad, seriedad, honradez y capacidad de trabajo para empezar a resolver los problemas del país.

Su propuesta incluye cambios en el sistema económico (enfaticando los aspectos productivos, la reindustrialización y un nuevo rol para el Estado) y definiendo un nuevo rol para la Argentina en el mundo fortaleciendo el Mercosur y sus relaciones con América Latina; desde este punto de vista, lo de Kirchner muy distinto a las "relaciones carnales" con Estados Unidos y el ALCA, centrales en la propuesta de Menem.

Tanto en su programa como en la composición de los equipos de gobierno, Kirchner combina de manera equilibrada elementos de cambio con una cierta continuidad con respecto al gobierno anterior. Esto le ha permitido conservar el apoyo de Duhalde, aprovechar el respaldo ciudadano a la gestión del saliente presidente, integrando en el gabinete a representantes del duhaldismo, ex funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Cruz y algunos extrapartidarios como es el caso de los ministros de Relaciones Exteriores y de Educación.

Llega al poder con el antecedente de haber gobernado la provincia de Santa Cruz de manera eficiente, alcanzando niveles de bienestar muy superiores a otras zonas del país.

En este panorama, se plantean algunos interrogantes. El primero tiene que ver con cómo lo afectará la renuncia de Menem a competir en la segunda vuelta, hecho que privó a Kirchner de un mayor respaldo electoral obligándolo a asumir con un escuálido 22% (menor incluso que el obtenido por el presidente Illía en 1964, aunque la comparación es injusta ya que en aquella época el justicialismo estaba proscrito)

Otro interrogante es su dependencia respecto a Duhalde. El mismo Menem ha señalado con insistencia que Kirchner es un instrumento del presidente saliente, sin poder real y sin autonomía. Es más, no faltan los que conjeturan que Duhalde está pensando en su candidatura para el 2007 y que no le interesa entonces un gobierno exitoso que empuje a Kirchner a buscar su reelección.

Finalmente está el interrogante sobre su experiencia de gobierno. Su gestión en Santa Cruz, la que para algunos constituye una fortaleza, es motivo de críticas para otros que ven allí un estilo clientelista; otros desmerecen los éxitos de su gestión afirmando que dicha provincia tiene muy poca población (la mayoría empleados fiscales) y muchos ingresos producto de las regalías petroleras.

Estos interrogantes cobran más importancia aún si se tiene en cuenta los desafíos que enfrente al nuevo gobierno. El primero, y tal vez el de mayor trascendencia, es encabezar un profundo cambio en la forma de hacer política que ha imperado en la Argentina durante las últimas dos décadas. Es decir, una política en donde predominaba un estilo personalista, plebiscitario, con predominio del poder ejecutivo; aunque con matices, según el periodo, se estableció una democracia de tipo delegativa en donde el presidente haciendo uso y abuso de sus facultades legislativas y aprovechando la situación de crisis, lograba imponer sus políticas con un mínimo de negociación y compensado dicho vacío por medio de la

cooptación de los sectores disidentes a través de una política clientelista con la elite.

Desde este punto de vista, Kirchner está obligado a desarrollar una política de búsqueda de consensos no solo porque asume con el 22%; incluso si hubiera habido segunda vuelta y hubiera obtenido una aplastante mayoría, el flamante presidente es consciente que la inmensa mayoría de esos votos eran "prestados" por el justicialismo bonaerense y por una gran parte de la sociedad argentina que expresaba su rechazo a la candidatura de Menem.

Esto queda expresado en su discurso de toma del poder; la invitación a construir prácticas colectivas de cooperación que asuman que en la Argentina concluye "una forma de hacer política y un modo de gestionar el Estado. Colapsó un ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y su consecuencia, la desilusión constante, la desesperanza permanente".

Su proyecto de reconstruir un capitalismo nacional supone el enfrentamiento con poderes políticos y económicos que durante años se han beneficiado del estado y de la sociedad argentina contribuyendo a generar la peor crisis de que el país tenga memoria. Semejante proyecto requiere el compromiso de un amplio abanico de alianzas.

Y en este escenario, emerge la pregunta por el futuro del justicialismo. En una primera lectura, el abandono a competir en la segunda vuelta significa el destierro de Menem de la arena política y si bien la historia está plagada de "muertos que regresan de sus tumbas" (Alfonsín, en el caso de Argentina, García en el caso del Perú son solo algunos ejemplos), dicha situación no parece ser reversible.

El problema no parece ser tanto el liderazgo de Menem sino cómo se relacionará el nuevo presidente con el sector que dentro del peronismo sigue las ideas del caudillo riojano. Si bien las recientes elecciones no renovaron los miembros del poder legislativo, Kirchner puede capitalizar las mayorías que el Partido Justicialista tiene tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Ello porque el justicialismo es un partido con un desarrollado sentido del poder por lo que una vez dirimida la contienda interna no pocos de los que hasta ese momento respaldaban a Menem cambiaran de socio.

No obstante, es posible que algunos de los proyectos de Kirchner sean resistidos por la fracción menemista ya sea por razones de contenido o bien para lograr alguna salida ventajosa a las posibles acciones del poder judicial de la cual Menem puede ser objeto. Kirchner ya señaló en su discurso cuando se anunció la renuncia de Menem a competir en la segunda vuelta que "no viene a pactar con el pasado" respuesta contundente al ofrecimiento del segundo a colaborar con el nuevo gobierno.

En un escenario así, Kirchner -quien no parece tener problemas en recurrir al apoyo de otras fuerzas políticas con las cuales se siente más cercano como es un sector del radicalismo, los antiguos adherentes del FREPASO y el mismo ARI de Elisa Carrió- necesita construir su propia base de apoyo política.

Es por ello que estos primeros meses de gobierno son tan fundamentales. No solo debe gestionar una todavía delicada situación sino que además debe neutralizar las últimas señales del poder menemista: lograr el control del partido, mantener la mayoría justicialista en ambas cámaras y que candidatos cercanos a él triunfen en las elecciones provinciales de fin de año.

Bibliografía

AGÜERO, Felipe y Héctor URZÚA, editores. (1998) *Fracturas en la gobernabilidad democrática*, Santiago: CAPP-Universidad de Chile.

ARRIAGADA, Genaro. *El trasfondo político de la crisis argentina*. Informe Nº 100, www.asuntospublicos.org.

BASUALDO, Eduardo. (2001) *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes - FLACSO-IDEP.

BORÓN, Atilio. (2000). *Tras el búho de Minerva*, Buenos Aires: FCE.

CHERESKY, Isidoro e Inés POUSADELA, (compiladores) (2001) *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas*. Buenos Aires: Paidós.

DAHL, Robert. (2001) *La democracia. Una guía para los ciudadanos*. Madrid: Tecnos.

DE IPOLA, Emilio. (1989) *Investigaciones políticas*. , Buenos Aires: ediciones Nueva Visión.

LINZ, Juan y Arturo VALENZUELA (compiladores) (1997). *La crisis del presidencialismo*, Madrid: Alianza.

JONES, Mark. (2002) "Una evaluación de la democracia presidencialista argentina: 1983-1995", en Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart (compiladores), *Presidencialismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

MAINWARING, Scott y Matthew SOBERG SHUGART (compiladores) (2002), *Presidencialismo y democracia en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

NOHLEN, Dieter y Mario FERNÁNDEZ (editores) (1998) *El presidencialismo renovado* Caracas: Nueva Sociedad.

NOVARO, Marcos y Vicente PALERMO (1998). "Gobiernos, parlamento y partidos en la Argentina de Menem", en Felipe Agüero y Héctor Urzúa, (editores.), *Fracturas en la gobernabilidad democrática*, Santiago: CAPP- Universidad de Chile.

O'DONNELL, Guillermo, "Acerca del estado, la democratización y algunos problemas conceptuales: una perspectiva latinoamericana con referencias a los países comunistas", en *Desarrollo Económico*, Vol. 33, Nº 130, págs. 163-183.

PEROZZUTTI, Enrique "La naturaleza de la nueva democracia argentina", en Felipe Agüero y Héctor Urzúa (editores.) (1998), *Fracturas en la gobernabilidad democrática*, CAPP- Santiago: Universidad de Chile.

TORRES, Juan Carlos (1998) *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

TORRES, Juan Carlos, et al, (1999). *Entre el abismo y la ilusión*. Buenos Aires: Editorial Norma.

10/10/10
10/10/10